

CHINA, EL FMI DE VENEZUELA

Tal Cual, martes 1° de octubre 2013

Isaac Mencía

Irónicamente, quienes durante más de 15 años han satanizado al Fondo Monetario Internacional (FMI) acusándolo de ser un instrumento al servicio de la dominación del imperialismo norteamericano al imponerle a los países como condición para sus préstamos Programas de Ajuste Estructural de corte neoliberal; han terminado por pisotear desde el poder la soberanía económica y financiera de Venezuela suscribiendo con la República de China Préstamos cuantiosos en condiciones leoninas y contrarias al interés nacional.

Aparte de lo censurable que resulta que el autoproclamado gobierno revolucionario haya estado endeudando masivamente a la República en un contexto donde se ha producido el más prolongado ciclo de alzas en los precios del petróleo, reportando para el régimen en el poder ingresos por exportación superiores a los 700 mil millones de dólares; que las necesidades de financiamiento del gobierno surgen como consecuencia de un proyecto totalitario de estatización de la economía para el control político de la sociedad el cual demanda ingresos y gastos ilimitados, a lo que se suma una gestión plagada de despilfarro, ineficiencia y corrupción; los préstamos de China imponen un conjunto de condiciones que lesionan la autonomía y libertad que debe tener todo Estado deudor para decidir el mejor uso que debe y puede dar a los recursos recibidos por endeudamiento.

Así, el conocido Fondo Chino, mecanismo ideado mediante el cual el gobierno ha recibido 44 mil millones de dólares entre los años 2008 y 2012, el mayor financiamiento de china en América Latina, establece que Venezuela no sólo debe cancelar los préstamos con la entrega de petróleo, sino que está obligada a conceder a empresas chinas la ejecución de proyectos en distintos sectores de la economía (petróleo, construcción de viviendas, electricidad, infraestructura, telecomunicaciones, y otros) y a comprarle a las mismas bienes y servicios producidos por éstas, con lo cual China como dice el refrán popular “se presta y se da el vuelto”.

Los 28 Convenios suscritos por la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-China, durante la reciente visita a ese país de Nicolás Maduro (21 y 22 de septiembre), son muy elocuentes al respecto. El gobierno se compromete en varios de estos convenios no sólo a conceder participación directa a empresas chinas en la industria petrolera mediante la constitución de empresas mixtas (PDVSA Y SINOPEC, para el desarrollo del bloque Junín 1 en la Faja Petrolífera del Orinoco), sino que se amplía la presencia de las mismas en sectores como la minería para el desarrollo de las minas de oro las Cristinas, ubicadas en el Estado Bolívar; a la agroindustria con la adquisición a China de cinco complejos agroindustriales azucareros, repotenciación y ampliación de dos centrales azucareros propiedad del Estado, y mejoramiento y optimización de otros cinco centrales estatizados.

Los convenios en referencia incluyen, igualmente, la venta de electrodomésticos por parte de la empresa china Haier Electrical a la empresa estatal Suvinca, la construcción de edificaciones a la FANB y suministro de material y equipo a esta institución, así como la compra de Telecom a la compañía china ZTE de los kits de partes y piezas para la fabricación de productos de telecomunicación, y la instalación de una planta de ensamblaje de autobuses en Venezuela.

Todos estos convenios obligan al gobierno a comprar a empresas chinas productos y servicios desplazando a empresas y a trabajadores venezolanos que podrían en muchos casos producir los mismos; a realizar compras de bienes independientemente del precio y de la calidad de los mismos afectando con ello la libertad de los consumidores de elegir; introduce una “competencia” desigual con empresas y proveedores de bienes de marcas con larga presencia en el mercado venezolano (caso de vehículos y electrodomésticos) desestimulando la inversión privada nacional y extranjera; y refuerzan el intervencionismo del Estado-gobierno en la actividad económica, pues los proyectos a ser financiados por China son de propiedad del Estado aun cuando son pagados con recursos de todos los venezolanos.

La quiebra de las finanzas públicas ha empujado al gobierno a vender la soberanía del país a una potencia que, a diferencia del FMI, no exige saneamiento de la economía sino entrega de recursos naturales y compras a sus empresas.